

Orden federal, la obligación de recibir monedas de esa especie en pago de contribuciones ó de cualquiera otro adeudo: que en consecuencia, la Administración de Rentas de Mazatlan, se ha negado con legítimo fundamento á recibir la moneda de cobre que ofrecían los quejosos, y por lo mismo, con esa negativa no ha infringido ningún precepto constitucional.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decreta: Primero: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sinaloa en 4 de Setiembre del presente año. Segundo: La Justicia de la Unión no ampara ni protege á los Sres. Bedo, Hernandez y C^o y Francisco P. Bustamante, contra el acto del Administrador de rentas del Distrito de Mazatlan, que refusa recibirles en moneda de cobre, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos, que adendan por derechos y contribuciones.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Tocaí.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Arteaga.—Ignacio M. Altamirano.—M. Auza.—Ignacio Ramírez.—E. Montes.—José María Vigil.—Simon Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 12 de 1876.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por el C. Jesus Gomez Velez, albacea dativo de la testamentaria de la finada D^a Porfiria Dávalos, contra el C. Gefe de Hacienda del Estado, por violacion de los arts. 13, 16 y 27 de la Constitucion.

PEDIMENTO FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que el C. Jesus Gomez Velez, como albacea de la testamentaria de D^a Porfiria Dávalos, presentó un escrito con fecha 9 del presente mes, solicitando amparo y proteccion de la Justicia federal, contra los procedimientos del C. Gefe Superior de Hacienda, relativos al remate de la finca urbana conocida con el título de la Escuela de Artes, y sobre los antecedentes al acto reclamado, solicitando á la vez su suspensión, por considerarse urgente el caso en cuestion. Presenta en su escrito, los hechos en que apoya su queja; cita algunas disposiciones que cree no se han observado y se han infringido en consecuencia; concluye manifestando, que se le debe otorgar el amparo que él solicita, en atencion á que el C. Gefe ya citado, con sus procedimientos ha violado en sus representados, las garantías que otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitución general de la República.

Por auto de 14 del corriente se mandó suspender el acto del remate, y que el Ciudadano Gefe de Hacienda rindiese el informe con justificación dentro del término de la ley competente, y cuyo auto fué debidamente cumplimentado. En consecuencia, no tuvieron ya lugar la segunda y tercera almonedas citadas; se presentó el informe relacionado con sus respectivos comprobantes en doce fojas, el que destruye los hechos referidos en el escrito de queja y justifica la legalidad en los procedimientos de

la autoridad ejecutora, como se desprende de las constancias que se tienen á la vista.

El C. Gomez Velez, como primer fundamento de su queja, expone que la Jefatura de Hacienda por sí y ante sí declaró buena la denuncia hecha por el C. Guadalupe Lopez, del gravamen que reconocían las fincas, subrogando en el denunciante los derechos al capital de cuatrocientos pesos, sin atender á la prescripción, circulares conducentes y á la ley de 9 de Agosto de 1869, y que de consiguiente fué indebidamente hecha.

Analizando esta primera parte de su defensa hecha en apoyo de su queja, observamos que la destruye el documento número uno, en el que consta con la evidencia de los hechos que se palpan, que la Secretaría de Hacienda fué quien declaró ser buena la denuncia del capital en cuestión, que la Superioridad ordenó la subrogación en los derechos del Fisco en el C. Lopez, y cuyo capital cobra hoy el agente de la Hacienda federal, por haber caducado los derechos del denunciante que no cumplió sus obligaciones, y estar dentro de la órbita de sus facultades legales.

Todos los demas razonamientos que alega con relacion al primer apoyo de su defensa en seguida el C. Gomez Velez, los destruye la confesion hecha por su antecesor Albacea, el C. Pedro Dávalos y el documento acompañado bajo el número dos, pero todavía con mas fuerza aún, el que la liquidacion sobre el capital en cuestión, formada por la Jefatura de Hacienda, fué aprobada por su Superioridad en 30 de Agosto de 1873, como lo prueba el documento marcado con el número tres.

Como consecuencia de los antecedentes que proceden, se tiene que convenir en que debidamente se mandó tirar la escritura de subrogación, la que fué extendida en 8 de Noviembre del mismo año ante el Escribano C. Candelario Medina; y por la propia escritura, de conformidad con lo prescrito en el reglamento de 10 de Diciembre de 1869, se obligó á reconocer sobre la finca en cues-

tion la parte de pagarés que no cubriese el subrogatario, cuya obligacion no es muy fácil poder eludir con engaños y sofismas que muy pronto están destruidos.

Estos pagarés de que viene haciendo relacion, fueron suscritos por el C. Guadalupe Lopez, quien no contestó al requerimiento nada, ni aún por cortesía.

Transcurridos los plazos marcados por la ley de la materia, no teniendo bienes el causante en primer término, llegó el caso en que la Jefatura dirigiera su accion contra la finca hipotecada, persiguiéndola, fundando sus procedimientos en los principios generales sobre hipotecas, en la ley de 5 de Febrero de 1861, segun previene el art. 36 en las Ordenes de la Tesorería General de la Nacion de 13 Diciembre de 1871, en la de 18 de Febrero del presente año y en la Suprema de Mayo último, de las que se han presentado copias bajo los números 4, 5 y 6 de los comprobantes, que justifican el procedimiento de la autoridad ejecutora del acto reclamado.

Examinando ahora el segundo fundamento del escrito de queja que presenta el C. Gomez Velez, que es no haber sido requerido de pago ni siquiera oido, y que se ha constituido la autoridad ejecutora del acto reclamado, en Juez y parte indebidamente y atacando los principios generales de Legislacion.

Con relacion al primer punto, tiene que decir con pena el que suscribe, que el quejoso ha incurrido en una falsedad, ciertamente poco justificable, supuesto que los hechos son indestructibles, y por la constancia que obra con fecha 16 está comprobado bajo la firma del quejoso, no solo que «él fué requerido de pago como albacea de la testamentaria de sus representados, sino que está escrita su contestación, la que se redujo á redarguir de nulo el denuncia, excepción imaginaria, por cierto de ningun valor, segun los justificantes presentados por la jefatura de hacienda.

Pasando á ocuparme del segundo y últi-

mo punto, que es el que queda por destruir, diré, que la ley, ó mejor dicho, el decreto de 20 de Noviembre de 1838, autoriza á todos los agentes del fisco para hacer uso de la facultad económico-coactiva, en los casos que determina; que el punto en cuestion es de los comprendidos en el art. 2 del decreto mencionado; y que los negocios, no se hacen contenciosos por una simple negativa; finalmente, que solo la excepcion de pago, es la que suspende el procedimiento en el cobro ejecutivo que hace el Fisco de sus adeudos líquidos.

Como consecuencia precisa de lo relacionado y probado, el que suscribe es de opinion, que siendo notoria la malicia con que ha procedido el quejoso, y no procediendo el amparo solicitado exclusivamente para enervar la accion del Fisco, como se comprende desde luego por el tenor de los justificantes del informe; la justicia de la Union, no debe amparar á los representantes del quejoso, con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion General, y que de conformidad con lo prevenido en el art. 16, se imponga al quejoso una multa de cien pesos, segun manda la ley de 20 de Enero de 1869, y que desde luego se levante la suspension del acto reclamado, si estuviese en las facultades del juzgado.

Aguascalientes, Julio 20 de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

Es copia que certifico: Aguascalientes, 20 de Julio de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

Alegato Fiscal.

«Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal, dice: que con fecha 25 de Julio último, se mandó abrir á prueba el juicio de amparo promovido por el C. Jesus Gomez Velez, como albacea dativo de la testamentaria de la Sra. Dávalos, cuyos

autos están hoy en estado de alegar, segun consta al juzgado.

Con vista de los justificantes que á su informe acompañó el ciudadano jefe superior de hacienda, el que suscribe manifestó en su pedimento fiscal, con toda claridad, que el recurso interpuesto por el quejoso es del todo improcedente, como consta á fojas 28 de estos autos; y en cuya pieza obran los fundamentos en que se apoya la opinion justa del que lleva la voz fiscal; la que con mas robustéz repite en este escrito de alegato, supuesto que las pruebas rendidas por el quejoso son contra-productas, segun demostrará sin ningun esfuerzo.

Son tres las piezas que forman la prueba rendida por el C. Gomez Velez, en el juicio de que nos ocupamos, segun consta de los mismos autos; las que paso á analizar sin pasion de ningun género, cumpliendo con los deberes del que lleva una mision de buena fé.

Es la primera, una copia de una escritura de 20 de Octubre de 1852, por la cual consta precisamente que, el Sr. Cura Perez, como albacea de la testamentaria de la Sra. Da Porfiria Dávalos, de la que lo es hoy el Sr. Jesus Gomez Velez, recibió *cuatrocientos pesos*, con responsabilidad de los bienes de la misma testamentaria, cuya cantidad es fraccion de una suma de *dos mil pesos*, que se consignó á la fundacion de una capellanía en 18 de Mayo de 1856, por el Sr. D. Juan M. Peñaloza y la Sra. su esposa; quedando hecha la imposicion en un terreno de la calle de San Diego de esta ciudad, en lo que se fabricó despues la casa *hoy embargada* y que fué morada de la Sra. Dávalos; haciéndose dicha imposicion, con hipoteca general de todos los bienes de la expresada Sra. Dávalos, con la especial de la cochera de la casa referida de la calle de San Diego; pudiendo ejercitar su accion el acreedor, como mejor conviniese á su derecho, sin que ninguna de las hipotecas pudiese perjudicarles.

La segunda prueba aducida por el Sr. Gomez Velez, es una copia certificada, en que consta una resolucion dada por el ciudadano presidente de la República; en ella se expresa, con relacion á la Sra. Dávalos, que se entregue á su testamentaria el capital de *siete mil pesos*; que es enteramente diverso del que es objeto este juicio de amparo; en este se trata de *cuatrocientos pesos*, que se dedicaron á la fundacion de una capellanía, como consta por la escritura presentada por el quejoso, que condujo como prueba, y que su resultado es enteramente contrario, por ser ella contra-productente, lo que se comprende con la simple vista del documento citado, el que se halla inserto en estos autos, para que el quejoso no se pueda quejar ni á si mismo.

La tercera es una certificacion tomada del expediente original, por el ciudadano Juez de Distrito de los autos á petición del mismo C. Gomez Velez, por su desgracia, supuesto que le perjudica demasiado, lo que creyó que le seria favorable, resultando esta prueba tambien contra-productente; porque la certificacion referida, demuestra con toda evidencia la justificacion de los procedimientos en este negocio por el ciudadano jefe superior de hacienda, en contra de quien se interpuso este recurso de amparo, no porque proceda ciertamente, sino para enervar la accion de la hacienda pública, lo que envuelve suma malicia, pues que se abusa de recursos que son legales, cuando se tiene justicia y derecho que deducir, aunque él sea dudoso, por lo ménos; pero no para deducir el cumplimiento de obligaciones nacidas de un contrato, que es tan claro como terminante, cual es el que desconoce el C. Gomez Velez.

Al emitir su opinion el que suscribe en su pedimento fiscal, con relacion al punto principal de si debe ó no otorgarse el amparo solicitado por el quejoso, en contra del acto ejecutado por el C. Ignacio Ocadiz, se ocupó del análisis de los justificantes que acompañó á su informe la autoridad

citada, los que justifican perfectamente bien sus procedimientos: de ocuparse en este escrito de ellos, seria una redundancia, que no produciria mas de una molestia al personal del juzgado.

Consecuente con el parecer fiscal, concluye manifestando, que con fundamento de los hechos expuestos y de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de los juicios de amparo, y de los arts. 101 y 102 de la Constitucion general, no procede el amparo interpuesto por el quejoso, que es el C. Jesus Gomez Velez.

Aguascalientes, Agosto 7 de 1874.—
(Firmado).—*Lic. J. Rondero.*

Es copia que certifico: Aguascalientes,
7 de Agosto de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

«Aguascalientes, 13 de Agosto de 1874.
—Vistos: D. Jesus Gomez Velez, con su carácter de albacea dativo de la testamentaria de la finada Sra. D^a Porfiria Dávalos, presentó ocurso con fecha 9 de Julio último, ante este juzgado de Distrito, en solicitud de amparo, contra los procedimientos del ciudadano jefe de hacienda federal en este Estado, que admitió la denuncia de un capital de capellanía de sangre que se creyó reportaba la finca ubicada en la calle de San Diego de esta ciudad, y conocida por la «Escuela de Retes,» contra lo prevenido, segun dice, en la ley de 9 de Agosto de 1869, circular de 9 de Abril de 1862, y contra la expresa resolucion del ciudadano presidente, comunicada por el ministerio de hacienda, con fecha 27 de Setiembre de 1868, que declaró y mandó se pudiese en posesion de la citada casa á los herederos de la expresada D^a Porfiria Dávalos, quedando aun pendiente por falta de informes de la jefatura de hacienda, de aquella época, varios capitales, que segun la última voluntad de la testadora, debian volver á sus herederos, extinguido que fue

ra el convento de monjas de la Enseñanza de esta ciudad. Aseguró en seguida la justificación de estos pormenores, de los que deduce, que al admitir la gefatura de hacienda la indicada denuncia, y al haber mandado por sí y ante sí, convirtiéndose en juez y parte, embargar, justipreciar y vender rematar en, 13 y 15 del citado Julio la mencionada finca, por falta de pago del adjudicatario; de la cantidad de \$179 25 cs., que consta del aviso publicado en el periódico oficial del Estado que acompañó á su escrito, con la calidad de que siendo valorizada la finca en \$5,711.32 cs., y debiendo quedar reducido su valor, por la rebaja de una tercera parte, al de \$3,807 55 cs., no ha podido ni debido consentir en semejante arbitrariedad: que por esta oposición hay contienda, y debió el ciudadano jefe de hacienda sujetarse al art. 3º del decreto de 20 de Noviembre de 1838, dejando á la autoridad judicial su resolución. Concluye manifestando: que el acto indicado ataca la propiedad de la testamentaria que representa, y vulnera las garantías individuales de los interesados en ella, consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitución general de la República, y que están comprendidas en la fracción 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; pidiendo en consecuencia el amparo y suspensión inmediata de dicho acto.

Vista la justificación de la personería del promovente: la suspensión decretada por la urgencia del caso: el informe justificado del ciudadano jefe de hacienda: el pedimento fiscal en que se solicita la denegación del amparo por la falta de fundamentos legales, y que se castigue la temeridad del actor con la multa que designa la ley. las pruebas y alegatos y cuanto mas convino ver en este negocio.

Resultando del informe y justificantes presentados por el ciudadano jefe de hacienda y por la parte promovente: que existen dos escrituras, visibles de fechas 14 á 17, 40 á 43, que comprueban la existen-

cia del capital de \$400, impuesto al cinco por ciento anual sobre los bienes de la finada Sra. Dª Porfiria Dávalos, para la fundación de un ramo de capellanía de sangre; la primera otorgada en 2 de Abril de 1796 ante D. Juan José Carrillo y Vertiz, ex subdelegado del intendente de este partido, por el Bachiller D. Agustín Enajabel, albacea de Dª Josefa Palacios, quien quita la venta que hizo á la citada Dª Porfiria, de la casa núm. 9 y sus contiguas por la cantidad de \$5,400, reconoció además la de 400 de un ramo de capellanía puesto en favor del Bachiller D. Juan Manuel Flores Alatorre, capellan que era entonces, y á los demás que le sucedieran en el mismo título. La segunda otorgada en 20 de Octubre de 1852 ante el escribano D. José María Calvillo, por D. Marcelo Dávalos, albacea dativo de la finada Dª Porfiria del mismo apellido, quien habiendo obtenido el consentimiento de la Mitra de Guadalupe para reducir la especial hipoteca á la cochera contigua á la casa, reconoció ese crédito de \$400, de la capellanía fundada por D. José María de Peñaloza y su esposa Dª Ana Guerrero, que gravitaba con anterioridad sobre todos los bienes de la repetida finada; pero sin libertarla de la hipoteca general, y sin coartar la libertad del colector de capellanías para dirigir su acción en defecto de pago, sobre los bienes que mejor le parecieran.

Resultando por el documento de fechas 38 y 39: que extinguido que fué el Convento de monjas de la Enseñanza, de esta ciudad, por la ley de 12 de Julio de 1859, el ciudadano presidente de la República, á informes que se le dieron para la distribución de los capitales que pertenecían á dicho Convento, resolvió con fecha 27 de Agosto de 1863: que la casa núm. 9 y demás que se refieren, se entregaran á los herederos de Dª Porfiria Dávalos, por pertenecer á estos con arreglo á la cláusula 9ª de su testamento.

Resultando según las constancias de la

gestatura de hacienda, visibles de fechas 8 á 27, y diligencia de fechas 34 y 35: que hace dos años se adjudicó al C. Guadalupe V. López, como denunciante, el capital de que se hace mérito, por instrucciones que para ello tuvo de la sección respectiva del Ministerio del ramo, sin que antes, ni después de hecha esta adjudicación, se intentara reclamo por el albacea y herederos de D^a Porfiria.

Resultando: que no habiendo satisfecho el citado López el importe de numerario distribuido en veinte pagarés, y siendo pasados con exceso los plazos, la oficina de hacienda excitada por la superioridad á dar cumplimiento á la ley de 5 de Febrero de 1861, con arreglo á las facultades que le otorga la de 11 de Diciembre de 1871, y sus aclaratorios, procedió al embargo y valorización de la finca núm. 9, cubriendo los requisitos de notificación, de los que aparecen las constancias respectivas á fechas 24 y 35 del expediente, y señaló para el remate el 13 y 15 de Julio próximo pasado, cuyo acto se mandó suspender por este juzgado, por la urgencia del caso.

Considerando: que según los resultados anteriores, el crédito de \$ 400 que gravitaba sobre los bienes de la testamentaria de D^a Porfiria Dávalos, fué antes de la adjudicación hecha por la oficina, al tiempo de hacerse, y aun mucho después, reconocido por los mismos representantes de dicha testamentaria, quedando por este hecho perfeccionado el acto, consumada la enagenación y prescritas las acciones que pudieran alegar, según lo determinado expresamente por el art. 19 de la ley de 4 de Mayo de 1861, y aclaratoria que hizo sobre su contenido la suprema circular de 29 de Abril del mismo año; y por lo mismo estaba en las facultades del ciudadano jefe de hacienda, en conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la ley de 20 de Enero 1837, calificar ó no el asunto de contencioso, según fueran los fundamentos de oposición del actual albacea: que por el ejercicio de esta

potestad, que es puramente administrativa, no viola en su caso el empleado que la ejerce los derechos del deudor, supuesto que usa de una facultad que la ley le otorga, y supuesto también que en el caso de inconformidad, la ley misma deja el recurso de ocurrir á los tribunales, quienes en el juicio respectivo decidirán si había habido ó no error en la calificación, y determinarán lo conveniente.

Considerando además: que por esta circunstancia no puede ser objeto del juicio de amparo la decisión de esa cuestión, sino del sumario marcado por la ley, porque en ambos, el resultado y efectos que produce, son bien diferentes, supuesto que la decisión del primero, teniendo por objeto la violación de garantías, traería en consecuencia la responsabilidad del empleado, que además de la parte penal, queda sometido en lo civil á las reclamaciones exageradas del deudor, por una calificación acaso errónea; pero que estaba en sus facultades hacerla, y que por lo mismo, no lastima el derecho del quejoso en términos de considerarlo como violación de sus garantías; siendo tanto mas fundamental esta opinión, cuanto que el art. 21 de la ante dicha ley de 37, también le exige responsabilidades si no obra con arreglo á las facultades que le están marcadas, y de aquí se sigue naturalmente, que tergiversando el abusante la calidad del juicio que debe entablarse, se coloca al empleado en una titulación perjudicial á los intereses que representa, lo que no es lícito se haga en detrimento de la causa pública.

Considerando: que además de lo expuesto, no hay positivamente fundamento legal en el razonamiento del promovente en este juicio, para considerar violadas las garantías que le otorgan los arts. 13, 16 y 27 de la Constitución, supuesto que ni se le ha juzgado por tribunal, ni por ley especial, en razón de que los empleados en rentas no ejercen facultades judiciales, sino económico-administrativas, para hacer efectivas las exacciones y adeudos de la Hacienda públi-

ca que fuesen ciertas y líquidas: que hasta hoy el fundamento principal del actor para creer violadas sus garantías, no es la incertidumbre del adeudo, que está confirmado por las escrituras presentadas, sino por el erróneo concepto que ha tenido de que la suprema resolución de 27 de Agosto de 1868, supuso la insubsistencia del gravamen que reportaba la testamentaria de D^a Porfiria Dávalos, ó la renuncia de parte del Gobierno al dominio de ese crédito; siendo así, que ni de su espíritu, que fué restringido á la calificación del derecho que daba á los herederos de esta Señora la cláusula 9^a de su testamento, ni de los actos ulteriores, por los que el mismo Gobierno ha prevenido á la Oficina respectiva la activa reclamación, se puede sacar tal concepto: que tampoco puede haber por lo mismo, violación de las garantías consignadas en los arts. 16 y 27, porque la propiedad de los bienes hereditarios soportan una responsabilidad que es carga de la herencia, la que por la eventualidad de la falta de Capellan de sangre que debiera disfrutarla, ha venido á recaer en el dominio de la Nación, la que goza sobre los bienes de sus deudores, no solo de los derechos que tenía el clero, sino también los privilegios de hipoteca tácita, y de elegir en casos de ejecución, los que les parezcan mas realizables, y que basten á cubrir el crédito que sobre ellos pesa, aún cuando no sean los hipotecados especialmente, (Doctrina de Escribano, palabra "Fisco," y leyes 16, 18 y 19, tít. 7^o Lib. 9^o de la Recop.); y ya se vé, que por la misma escritura que ha presentado posteriormente la parte quejosa, (fs. 40 á 43) el Colector de Capellanías se reservó ese mismo derecho; así es que por tales circunstancias, ha podido el C. Gefe de Hacienda motivar el acto de embargo y ejecución, con la calidad de competencia que le dan las facultades económico-coactivas, por las leyes citadas y los arts. 36 y 37 de la de 5 de Febrero de 1861, sin atacar el derecho de propiedad, y sin que sea obstáculo la reclusión de la hipoteca es-

pecial á solo la cochera contigua á la casa que se versa.

Por todos estos fundamentos y los que se expresan además en el informe justificado de la autoridad ejecutora, y en los pedimentos y alegato del C. Promotor fiscal, el Juez que suscribe, de conformidad con lo prevenido en los arts. 101 y 102 de la Constitución general, y ley de 20 de Enero de 1869, declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Jesus Gomez Velez, albacea dativo de la testamentaria de D^a Porfiria Dávalos, contra los procedimientos de embargo y remate que trata de verificar el C. Gefe de Hacienda del Estado, en la casa número 9 de la calle de San Diego de esta ciudad, para pago de \$179.25 cs., que se adeudan á la Hacienda pública Federal, por el denunciante D. Guadalupe V. López, á quien se habia adjudicado el crédito de \$400. y sus réditos, perteneciente á una Capellanía de sangre que reconoce sobre sus bienes la testamentaria de aquella Señora.

Notifíquese esta sentencia, publíquese por los periódicos, y remítase con el expediente á la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para los efectos legales.

El C. Juez de Distrito del Estado, fallando definitivamente, así lo decretó y firmo: doy fé — *Isidro Arteaga.* — *Silverio Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 17 de Agosto de 1874. — *Silverio Arteaga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 7 de 1874. — Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Jesus Gomez Velez en calidad de albacea de la testamentaria de la Sra. D^a Porfiria Dávalos, contra el gefe de hacienda federal de ese Estado, que ha dispuesto el remate de la casa número 9 de la calle de San Diego de aquella ciudad, por violación de

las garantías á que se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución general, y

Considerando: que segun aparecen las constancias de autos, no se han vulnerado en las personas de los interesados en la testamentaria, á cuyo nombre implora el quejoso, el goce de garantías á que se refiere; de conformidad con lo que se proviene en el art. 101 de la Constitución General y por los propios fundamentos en que se apoya el fallo pronunciado por el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio por dicho Juzgado, á 13 de Agosto último, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Jesus Gomez Velez, albacea dativo de la testamentaria de Doña Perfiria Dávalos, contra los procedimientos de embargo y remate que trata de verificar el ciudadano jefe de hacienda del Estado, en la casa núm. 9 de la calle de San Diego de esa ciudad, para pago de ciento setenta y nueve pesos veinticinco centavos que se adeudan á la hacienda pública federal, por el denunciante D. Guadalupe Velez, á quien se habia adjudicado el crédito de cuatrocientos pesos y sus réditos, pertenecientes á una capellanía de sangre que reconoce sobre sus bienes la testamentaria de aquella señora.

Devuélvanselas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. de Oastañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre
TOMO VII.—PARTE II.

28 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Lic. Antonio Inclan, en representacion de varios vecinos de San Lorenzo Tepaltitlan, contra el procedimiento y sentencia del C. J. M. Bermeo, Juez 2º conciliador de la capital de ese Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el C. Lic. Antonio Inclan por ocurso de fecha 5 del mes próximo pasado y en representacion de doscientas ochenta y seis personas, vecinos del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlan de esta municipalidad, cuyos nombres constan en el poder jurídico que acompaño, interpone el recurso de amparo por violacion de las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, sobre el procedimiento y sentencia pronunciada por el C. José María Bermeo, juez 2º conciliador de esta Capital, en el juicio promovido por el comun del pueblo de San Mateo Otzacatipan, sobre restitucion de un egido, en cuyo juicio falló: que los vecinos de San Lorenzo restituyan al pueblo de San Mateo, los terrenos que poseen á título de adjudicacion.

El acto reclamado puede reducirse á estos términos: que los peticionarios no han sido oídos en el juicio, y sin su audiencia han sido sentenciados por un juez incompetente.

En los autos del recurso de amparo, existen constancias que justifican los conceptos siguientes: